ACTA DE LA SESION No.19-11
DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

Acta de la Sesión N° 19-11 del Consejo Nacional de Rectores, celebrada el cinco de julio del dos mil once, en el Edificio "Dr. Franklin Chang Díaz". La sesión se inicia a las trece horas y cincuenta minutos, con la asistencia de: Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien preside; Dra. Yamileth González García, Rectora de la Universidad de Costa Rica; Licda. Sandra León Coto, Rectora de la Universidad Nacional; M.B.A. Luis Guillermo Carpio Malavassi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, y M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). Asiste como invitado especial el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Asesor Legal del CONARE.

Artículo 1. Financiamiento y presupuesto

Se analizan algunas de las solicitudes de recursos de los proyectos que continúan en el 2012 del Fondo del Sistema y convienen los rectores y rectoras en continuar este análisis en la próxima sesión.

Artículo 2. Aprobación de actas

En discusión el acta de la sesión N° 18-11 del Consejo Nacional de Rectores.

SE ACUERDA EN FIRME aprobar el acta de la Sesión N° 18-11 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el día 28 de junio de dos mil once.

Artículo 3. Representaciones:

Nota de fecha 14 de abril de la OUI, solicitan la designación de un representante en el Comité Académico del Centro Argentino de Estudios Internacionales, el CAEI.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que es lo que la OUI ha venido impulsando, un enlace institucional para hacer reuniones virtuales. El punto ya se había visto e incluso se suscribió el convenio de internacionalización de la educación superior, pero quieren que haya alguien con quien se puedan comunicar para hacer video conferencias, entre otras cosas.

Cuando han llamado él los ha atendido, pero en definitiva lo que quieren es un enlace institucional.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO considera que la persona más apropiada es don José Andrés Masís.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ opina que es lo más pertinente.

SE ACUERDA EN FIRME designar al M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ante el Comité Académico del CAEI y comunicarlo oficialmente a la OUI.

Artículo 4. Programas y Comisiones

a. Comisión de Incentivos del MICIT.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS manifiesta que según le han indicado, el MICIT necesita tres representantes de las universidades nombradas por el CONARE. La costumbre ha sido delegar la

representación en la Comisión de Vicerrectores de Investigación. Se designan tres titulares y un suplente e incluso ha llegado otro suplente del CENAT, no recuerda si era don Alejandro Cruz cuando estaba.

Se requiere el acuerdo del CONARE en ese sentido e indicar quiénes serían los titulares y quiénes los suplentes y que quede constando en el acta.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO indica que el representante de Investigación actualmente es el señor Milton Villarreal. Aprovecha para hacer entrega de la notificación oficial de la Rectoría sobre la designación de los vicerrectores.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que habría que ver si quieren tener un quinto representante suplente, porque a veces se les presenta dificultad a los titulares para asistir a las reuniones.

Es importante tener esto a derecho, las universidades tienen un buen número de representantes en la Comisión de Incentivos y algunas de las propuestas del Ing. Alejandro Cruz tendrán que verse en ella.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO considera que el señor Milton Villarreal podría ser el miembro Suplente, en vista de que está comenzando en sus funciones.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que estaban como propietarios el doctor Henning Jensen, las señoras Luisa Castillo y Katia Calderón. El señor Dagoberto Arias, como Suplente.

SE ACUERDA EN FIRME tomar nota de la designación del Dr. Milton Villareal Castro, Vicerrector de Investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como representante suplente ante la Comisión de Incentivos, en sustitución del Dr. Dagoberto Arias Aguilar y comunicarlo al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

b. DS-OF-21-2011 de 17 de junio, 2011. "Propuesta de políticas institucionales del CONARE para el 2012".

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ pregunta si algunas de las propuestas tienen que ver con PLANES.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS responde que algunas coinciden, otras son más de carácter institucional. Están redactadas en apoyo a la ejecución del PLANES y de las universidades. Los ejes coinciden con los del PLANES. La idea es que la estructuración de las políticas del CONARE vaya en apoyo del Plan de la Educación Superior y sus ejes.

En cuanto al último párrafo de la política 3.3 encuentra que está un poco singularizado con respecto al proceso de acreditación. Las políticas son de carácter más general.

LA LICDA. SANDRA LEÓN encuentra que está mejor la redacción que tenían antes, excepto que no hay procesos de mejoramiento en el 3.3; habría que agregar algo en ese sentido.

SE ACUERDA EN FIRME:

Aprobar la "Propuesta de Políticas Institucionales del CONARE para el 2012" con una modificación en el punto 3.3, el cual deberá leerse:

Fortalecerá la excelencia académica mediante procesos de autoevaluación y mejoramiento, evaluación externa, acreditación cuando corresponda y certificación de las diversas actividades universitarias.

Se elimina el último párrafo.

- c. CCIC-08-11 de 29 de junio, 2011. Informe de Autoevaluación 2010 de la Comisión de Control Interno del CONARE.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS explica que según el análisis que hicieron se han venido cumpliendo las metas. El SINAES salió un poco más bajo en el cumplimiento de los compromisos, debido a cambios de procedimientos de conformidad con la nueva Ley. Por tal motivo, sale un 50% de cumplimiento y el otro 50% parcialmente. EL CENAT sale con un 90%, OPES y Estado de la Nación con un 83%.

El informe de la Comisión indica que se ha progresado y le parece que podrían analizarlo y verlo en una próxima sesión.

SE ACUERDA dejar pendiente para una próxima sesión el análisis del Informe de Autoevaluación 2010 de la Comisión de Control Interno del CONARE.

Artículo 5. Regionalización:

- a. CE-23-2011 de 30 de mayo, 2011. Solicitud para establecer el Programa Permanente de Regionalización Interuniversitaria en CONARE.

LA LICDA. SANDRA LEÓN les recuerda que este asunto lo han tenido retenido porque habían solicitado a los vicerrectores correspondientes un dictamen y no lo han recibido. Posteriormente se pidió que les recordaran el asunto y no hubo respuesta. Le parece que habría que precisarles una fecha para que presenten el dictamen.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS comunica que doña Sonia Rojas, de la División de Coordinación, le informó que la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social vio la nota del CONARE y que estaban en la elaboración de la respuesta.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ se pregunta si tendrá sentido formular programas del fondo del sistema con carácter permanente. Ahora hay recursos, pero le parece que el CONARE no puede comprometerse en tener permanentemente un programa, porque en algún momento se podrían generar cambios.

LA LICDA. SANDRA LEÓN considera que también hay implicaciones de tipo legal, por ejemplo, en la Universidad Nacional, cuando hay una actividad permanente, los académicos adquieren derecho sobre las plazas y no pueden cubrirse esas cosas con cargo al fondo del sistema, además ella siente que académicamente no se justifica.

Y otra de las cosas que a ella más le preocupan, desde el ámbito académico, es que más bien en la UNA han procurado institucionalizar más los programas porque necesitan que estos refuercen las sedes regionales. Y no como venía dándose, un programa que pasaba al frente de las sedes regionales sin penetrarlas. Le pertenece que un planteamiento como el que hacen, no coincidiría con lo que quieren hacer con sedes regionales.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO considera importante informarse de cuánto se está invirtiendo en masa salarial porque se está dando un fenómeno: en el TEC, después de tenerse un nombramiento durante tres semestres, se adquiere la propiedad. Sin embargo, quienes han sido nombrados en estos proyectos no podrían hacerlo: tuvieron un caso en el que la Sala Cuarta indicó que se requería concurso para poder tener propiedad.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ indica que se tiene estabilidad, aunque no se tenga propiedad, pero es una estabilidad impropia, como la llaman en la Oficina Jurídica.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO encuentra que entonces ahí hay un gran problema, si van a continuar con el programa tal y como está actualmente, se estaría incurriendo en alguna falta. Otra cosa sería crear códigos en el entendido de que si algún día eso se reduce, los códigos desaparecen.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO considera necesario saber cuántas personas hay nombradas, cuánto están invirtiendo. Él sabe que la UNED tiene casi tres años de estar en ese procedimiento. Tendrían que ver en cada Universidad cómo lo resuelven, pues todas tienen características diferentes. El puede crear un código sujeto a ingreso de regionalización, en el momento en que eso se corte, el código desaparece dentro del procedimiento de la UNED, pero no sabe cómo es en las otras universidades.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS se refiere a los nombramientos, cree que van a tener que dedicarle un tiempo para ver qué se hace con eso porque en el CONARE sólo el CENIBiot tiene veintitrés plazas, más algunas del del CENAT y OPES, que son con cargo al Fondo del Sistema. En general todos los programas tienen, incluso el Estado de la Educación. Cree que habría que hacer una definición con respecto a todos esos programas, poner un término o ver cómo están las cosas porque están llegando a un punto crítico y si en algún momento hubiera que tomar alguna decisión, podrían no tener recursos para hacerle frente.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO pregunta si están haciendo las reservas de las garantías de esa gente.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO indica que cada Universidad está asumiendo la responsabilidad. Por eso es necesario saber cuál es la proporción de lo que están pidiendo con respecto a masa salarial, cuántas personas están nombradas, el tiempo que tienen, para verlo en el contexto y por eso es que ellos quieren formalizarlo. Él espera que en regionalización eso nunca desaparezca porque para él es algo hermoso, pero sí deben ordenarlo.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO está de acuerdo en que es hermoso, pero hay una situación real y hay que ver si en realidad es algo pensado por las universidades en el sentido de darle la permanencia a algo así.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ manifiesta que por su parte no está de acuerdo y cree que la situación señalada abarca a todas las áreas con proyectos de este tipo: los de investigación, los de acción social y vida estudiantil. Considera urgente realizar el estudio y en una forma más integral.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO opina que podrían tomar un acuerdo en el sentido de que les hagan un estudio de la responsabilidad patronal que están adquiriendo con esas plazas del fondo

del sistema.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que el punto es que como son proyectos que continúan la gente se va perpetuando. Al principio todos eran plazos fijos y en esa forma no se generaba ninguna obligación, pero si se replantea el proyecto y continúa la misma persona pues va adquiriendo algunos derechos, como las prestaciones.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT señala que no tienen derecho a la reinstalación y está la Convención Colectiva que indica que se tiene acceso únicamente por concurso.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO explica que no todos ingresan por concurso; en el caso de ellos, en las regiones escogieron quiénes iban a ser nombrados y se tuvo el cuidado de hacerlo así.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS agrega que ahí se han escogido por concurso pero no uno que ofrece propiedad, sino específicamente para escoger a plazo fijo con base en las condiciones del proyecto.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO opina que en el caso de que topen con el 4.5 por ciento del FEES, un escenario crítico, no habría fondos del sistema.

En este punto el acuerdo sería recordarles a los vicerrectores el informe y que en él se contemplen las personas que están nombradas y desde cuándo, como lo ha expresado don Luis Guillermo Carpio.

SE ACUERDA EN FIRME

- i) Recordarles a los Vicerrectores de Extensión y Acción Social el informe solicitado (caso de regionalización), pidiéndoles que en él incluyan el número de personas que están nombradas, desde cuándo y qué tipo de nombramiento tienen.
 - ii) Que en cada Universidad y el CONARE se realice un estudio sobre la forma de contratación en otros programas y proyectos (aparte de los de regionalización) con cargo a recursos del Fondo del Sistema.
- b. R-3082 acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica solicita que en lugar de “sedes” se utilice el término “campus” para designar espacios de programas interuniversitarios.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ explica que como en la Universidad de Costa Rica solo el Consejo Universitario crea sedes, aunque ella no estuvo en esa discusión, se imagina que ellos sienten que se les están usurpando derechos. Está claro que son espacios donde todas las universidades tienen programas, se le llaman sedes interuniversitarias o ínter sedes.

LA LICDA. SANDRA LEÓN manifiesta que en el caso de la Universidad Nacional tienen sedes y las sedes tienen campus e igualmente los nombramientos los hace el Consejo Universitario. Piensa que podría decirse que las instituciones del CONARE tienen diferentes terminologías y aclarar que no se trata de una sede de determinada Universidad, sino que son áreas de concentración de diferentes actividades.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO piensa que en ese caso estarían aceptando que la palabra “sede” es la más común a las cuatro universidades, lo cual no es cierto porque para la UCR sede tiene

otro contenido. Finalmente hay que ponerle un nombre a la par y ¿quién decide ese nombre?

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT indica que el Instituto Tecnológico tiene disposiciones estatutarias para sede.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ agrega que el concepto “campus” de alguna manera existe.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS se refiere a un acuerdo de CONARE para sedes interuniversitarias. Es un espacio creado para una oferta conjunta de carreras de las cuatro universidades que forman el CONARE. Pareciera que cualquier término de los usuales que se quiera aplicar en ese sentido choca con disposiciones o normativas internas de las universidades.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ sugiere indicar que se va a realizar un estudio dado que el término tiene en cada Universidad una connotación diferente y que incluso “campus” choca con el Estatuto de la Universidad Nacional.

LA LICDA. SANDRA LEÓN piensa que el estudio debería estructurarlo el Lic. Gastón Baudrit, para que pueda citar los diferentes estatutos de las universidades.

SE ACUERDA que el señor asesor legal, Lic. Gastón Baudrit, realice un estudio de la normativa universitaria pertinente con el propósito de analizar la propuesta del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica para un cambio del término sede aplicado al programa interuniversitario que se ofrece en Alajuela.

Artículo 6. Varios:

a. Correo electrónico de fecha 3 de junio, 2011 del señor Gerardo Mondragón Barahona del Comité Organizador del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida sobre trámites ante el Registro Nacional para inscripción del Premio.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ recuerda que se había tomado un acuerdo para que fuera a nombre del CONARE.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT sugiere enviar el asunto a la Asesoría Legal para revisar si existe algún acuerdo en ese sentido.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS expresa que él había pensado que la Defensoría hubiera querido hacer la inscripción. Habría que preguntarle a don Gerardo Mondragón si él coordinó lo de la solicitud con ellos.

LA LICDA. SANDRA LEÓN piensa que se podría poner a la Defensoría como patrocinadora o con una calidad diferenciada.

Concluido el intercambio de opiniones,

SE ACUERDA trasladar el comunicado al asesor legal, Lic. Gastón Baudrit, para que revise lo que se haya establecido en cuanto al registro del nombre Premio Aportes a la Calidad de Vida y que coordine el asunto planteado sobre la inscripción de dicho nombre con el señor Gerardo Mondragón.

b. Propuesta de actualización de la normativa de la Asesoría Legal del CONARE.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT no entiende por qué este punto quedó en la agenda, pues ya se habían aclarado dos cosas. Primero, que no se trata de la creación de una oficina, sino la adecuación de normativas internas de la Institución, como reflejo de un proceso que esta vivió al levantar todos los procedimientos internos.

Cuando la Institución comenzó a hacer el levantado de todos los manuales de procedimiento, quedó más clara la necesidad de establecer los vínculos de la Asesoría Legal, con los procesos internos de la Institución. Se actualizó en ese aspecto la normativa que estaría aplicándosele a la Asesoría Legal más formalmente porque esta tenía una serie de funciones que no estaban documentadas. Muchas quedaron ahora documentadas en un Manual de Procedimientos, aunque este, por sí mismo, no equivale a un reglamento que es lo que debería quedar como resultado de toda la revisión de procedimientos.

Cuando se analizó se preguntó si tendría algún impacto financiero y se indicó que todas las personas están nombradas, excepto una que está hace más de diez años por contratación de servicios profesionales. Ya la Contraloría General de la República les llamó la atención en el sentido de que podrían estar incurriendo en un fraude laboral y que tenían que revisar dicha contratación. Es el caso del señor Arturo Ferrer, quien tiene años de estar prestando servicios de gestoría legislativa, seguimiento de proyectos de ley, de decretos del Poder Ejecutivo, todo relacionado con el quehacer de las universidades, de su autonomía y también generando mociones. Algunos proyectos universitarios de CONARE los han movido por medio de él incluyendo la incorporación del listado de proyectos, que les interesa a las universidades, en un Decreto de convocatoria. Al conversar con asesores y personal técnico logran que se vayan incluyendo algunos de los proyectos de ley que han tenido una repercusión importante en el quehacer universitario.

Dicha contratación sí va a tener un impacto financiero, aunque no mucho, porque la modalidad de contratación por servicios profesionales tiene un costo un poco más bajo que el costo que va a suponer recontractar a la persona que ha estado contratada desde hace algún tiempo, y tendría un diferencial sobre lo cual van a rendir el informe que se les solicitó.

Si les parece, en la próxima sesión podrían hacer una presentación sobre cómo queda todo organizado y en el caso de este servicio de gestión legislativa informarían más en detalle, en qué consiste, qué servicios está prestando. En este momento todas las rectorías están conectadas al sistema de gestión legislativa. Tienen el sitio web de CONARE, un centro de información en el que pueden consultar proyectos de ley relevantes para la educación superior, sus textos, mociones, dictámenes de los consejos universitarios. Todo está a disposición de todos los miembros de los consejos universitarios para cuando ellos quieran consultar sobre alguno de los aspectos que les interese en dichos proyectos de ley.

Tienen un informe de desarrollo de proyectos de ley diario del acontecer legislativo, don Arturo les indica en qué estado se encuentra cada uno de los expedientes de interés universitario, si se necesita gestionar alguna audiencia.

SE ACUERDA posponer la decisión sobre la organización planteada por el señor Asesor Legal del CONARE a la espera del informe que brindará sobre costos adicionales para su implantación.

c. UNED: CU.2011-328 de 16 de junio, 2011. Vigencia convalidación de un diploma extranjero.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO explica que existe en el Consejo Universitario preocupación porque en algunos casos se solicita equiparación años después de haberse emitido un título.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ manifiesta que hay casos en que alguna persona guarda un título y lo somete a equiparación cinco años después, efectivamente. El punto es si va a entrar a funcionar a partir de ese momento, o a partir del momento en que se emite el título.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS considera que se generaría algo parecido si alguna vez las universidades dicen que sí reconocen los títulos propios de España, entonces a todos los que se les dijo que no, porque no eran de recibo, qué se haría en esos casos. Estos títulos propios de España la misma legislación española indica que no tienen validez académica en el país y en las universidades no se les da trámite. No es que sean malas titulaciones, algunas son tan buenas como cualquiera de otra Universidad, pero su condición choca con los requisitos establecidos para el reconocimiento y la equiparación.

Recuerda que al principio las universidades no tramitaban reconocimientos ni equiparaciones de grados y títulos que no tenían y hubo que sacar una resolución, una recomendación de la asesoría legal, en el sentido de que no se podía dejar a las personas en una situación de indefensión. A las universidades se les ha dado el encargo de decidir al respecto y nadie más tiene ese encargo en el país. Si alguien venía con un doctorado en Ingeniería Nuclear no se le podía habilitar el grado porque no existía aquí ese doctorado.

Durante mucho tiempo ese fue el criterio que prevaleció. Después se dijo que la Universidad tenía la obligación de equiparar los grados por lo menos y decir en qué área podía desempeñarse la persona. Ya se han resuelto varios de esos problemas, pero podría quedar algún caso en que no se reconocía el título porque no se tenía el equivalente, y habría que ver qué se hace.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO expresa que la licenciada Sandra León había recomendado hacer una revisión integral de toda la normativa.

LA LICDA. SANDRA LEÓN comenta que en algún momento en que ella cuestionó esas cosas, don José Andrés Masís le dijo que no era tanto lo de aquí, como lo de las propias universidades. Habría que comenzar por algún lado la revisión, quizás flexibilizando algunas cosas. Hay cosas tan obvias como que se podría pensar para qué enviar a las universidades cuando aquí podrían tener una buena base de información con respecto a los títulos y las universidades y reconocerlos. Generar un mecanismo diferente, llevar a las universidades estrictamente lo que no pueda tener una solución evidente. Eso sí afectaría el Reglamento interno.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS considera que habría que ver quién podría decir qué se reconoce y equipara porque en principio el CONARE no tiene esa potestad, solo la tiene cada una de las universidades.

LA LICDA. SANDRA LEÓN manifiesta que si se pudiera hacer un barrido muy general de los títulos que usualmente llegan, se podría antes de hacer la matriz, consultar a las universidades. Lo que se sabe es que ese título ya fue reconocido y equiparado en determinada universidad.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS agrega que habría que ver cómo se hace para que siempre sea la universidad la que respalde el acuerdo, es algo que se puede hacer, para que ninguna persona

que no tenga potestad pueda autorizar cambios, aunque sea con buena intención.

De hecho, se han presentado casos en que los miembros de la Comisión varían los requisitos y han tenido problema con la Sala Cuarta porque de repente se le varió el requisito a alguien, son cambios que no están autorizados por ninguna universidad o el CONARE y ellos no tienen potestad para hacerlo. Lo han hecho con buena intención, pero con solo que alguien diga que no hubo autorización de una universidad o del CONARE ya estarían frente a un problema de legitimidad de la acción. Es un tema que siempre resulta muy controversial y complicado, pero sabe que las rectoras y los rectores periódicamente señalan el interés de discutirlo y habrá que buscar un buen momento para hacerlo. La idea es ver cómo funciona el sistema en la forma más simple posible.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT explica que uno de los primeros efectos que tiene reconocimientos y equiparación, una vez que se concede, significa una modificación salarial y si se le da efecto retroactivo el problema que tienen en el fondo es que los salarios no prescriben.

SE ACUERDA EN FIRME trasladar la nota recibida del Consejo Universitario de la UNED a la Asesoría Legal para que analice el caso y rinda un dictamen para consideración de este Consejo.

- d. Convocatoria para pronunciarse respecto a oficio AFP-615-2011 de 14 de junio de 2011, de la Procuraduría General de la República, sobre consulta del Consejo Superior de Educación acerca de si las Universidades Privadas pueden impartir Diplomados.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT explica que el problema que hay es que el CONESUP ha estado analizando si las universidades privadas pueden otorgar o no diplomados. En el dictamen que se elaboró, lo que se hace es un análisis de las competencias constitucionales que corresponden a las instituciones. Tienen que diferenciar que la gente hace eso porque se ha perdido la disciplina de diferenciar el diplomado universitario del parauniversitario.

En la Constitución Política se creó un sistema educativo integral en sus diferentes ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria y se crea un Consejo integrado de conformidad con lo que dispone la Ley, para dirigir esa enseñanza. Ese es el bloque inicial de educación.

Cuando se analiza el tema de la educación universitaria el constituyente toma dos decisiones muy importantes: elevar a rango constitucional todo el derecho administrativo universitario que existía en la época, entonces en lugar de ser disposiciones de carácter legal, tienen un rango legal donde la Ley ordinaria no lo puede modificar porque es parte de la Constitución a pesar de que sigue siendo una Ley General de la República. Existe un reforzamiento constitucional que impide esa reforma. Ese es un régimen de independencia que les da a las instituciones y además, el texto constitucional lo que describe es personalidad jurídica. La capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones es la definición doctrinaria de lo que es la personalidad jurídica.

Lo anterior significa que las personalidades que habían sido dadas por ley, ahora tienen rango constitucional. O sea que el Estado sí tiene un estado dentro del otro estado. En la organización política costarricense hay una sola persona Estado. A la Universidad de Costa Rica se le ha dado una personalidad constitucional, es un Estado dentro del otro Estado y eso no se ha analizado específicamente en muchos ámbitos. Por ejemplo, en materia hacendaria –han estado hablando desde hace varios años-, si bien hay hacienda pública, por Constitución Política hay hacienda universitaria separada y que depende del gobierno de las cuatro instituciones porque la

Constitución así lo dispone, no se puede leer de otra manera. Como el Estado tiene una serie de cometidos, en salud, en seguridad, en educación universitaria ese cometido se le sustrae al Estado y queda el compromiso propio de las universidades.

En el ejercicio de ese cometido las universidades definen lo que van a hacer sus grados universitarios. Ahí se define el diplomado, también el profesorado como nivel previo al bachillerato. Pero lo que interesa es el diplomado y este que data de 1977 –la primera nomenclatura que se nombró-, y ese diplomado es universitario. En 1981 viene el diplomado de las parauniversitarias en el que no participan las universidades. No opinan, no definen, no dictaminan, no siguen el concepto de crédito tampoco, están sujetos al bloque constitucional y de legalidad que para la educación pública le corresponde definirlo al Consejo Superior de Educación, no a las universidades.

Esa diferenciación, en el discurso de los diplomados, se perdió no sabe en qué momento, entonces lo que se está haciendo es pidiéndole a la Procuraduría que retome el tema de que existe en el país un diplomado universitario y un diplomado parauniversitario. La Procuraduría General de la República a solicitud del propio CONESUP para que le definan si ellos tienen competencia o no para ver los diplomados.

Si se hace esa diferencia no hay conflicto, seguirá existiendo diplomado parauniversitario atendido por el Consejo Superior de Educación y los diplomados universitarios como parte del quehacer de las universidades, le corresponde al CONESUP en el ámbito privado conocerlo, pronunciarse y aprobarlo en su momento como programa académico y ojalá conducente a otros grados.

En el dictamen de la Asesoría Legal del Ministerio de Educación, lo que están proponiendo es que se incorporen los diplomados parauniversitarios a la formación universitaria y eso no, la experiencia fue totalmente contraria en el Consejo de Articulación.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS explica que en el caso de la Universidad Técnica, hubo que reformar todos los planes parauniversitarios para que fueran diplomados universitarios.

Concluida la exposición del licenciado Baudrit,

SE ACUERDA acoger criterio vertido en el siguiente dictamen del Asesor Legal y comunicarlo a la Procuraduría General de la República:

“Me refiero al criterio que se solicita mediante oficio de la Procuraduría General de la República número AFP-615-2011 de catorce de los corrientes, en los siguientes términos:

Por principio general, la educación pública costarricense fue concebida por nuestros constituyentes como un proceso integral correlacionado, desde la preescolar hasta la universitaria. Su dirección corresponde a un ente de rango constitucional: el Consejo Superior de Educación (artículos 77 y 81 de la Constitución Política).

Al discutirse el tema de la educación universitaria, los constituyentes establecieron una excepción a este principio, regulada en los artículos 84, 85, 87 y 88 de la Constitución Política, en virtud de la cual se elevaron a rango constitucional las normas legales que la regulaban. El fenómeno en doctrina es conocido como “constitucionalización del Derecho Administrativo”, “universitario” en el presente caso.

Siguiendo las corrientes doctrinarias de la época, la adopción de este régimen de excepción constitucional respondió al concepto de “autarquía” en virtud del cual se separa e independiza en forma total y plena a una entidad dentro de la organización política del Estado. Este régimen sólo admite ser creado por una norma de rango constitucional.

Esta organización política del Estado en nuestro país implicó darles a estas instituciones “capacidad jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones”, atributos que definen y delimitan doctrinariamente el concepto mismo de personalidad jurídica. En otras palabras, la personalidad jurídica legal que ostentaron estas instituciones antes de la constituyente, fue sustituida en ésta por la dotación directa de personalidad jurídica por norma de rango constitucional, creando una excepción a la persona y unidad misma del Estado costarricense, en materias de organización, gobierno, normativa, funcionamiento, patrimonio y presupuesto universitarios. Las implicaciones derivadas de este régimen de independencia plena todavía no han sido consideradas ni reflejadas en todas sus consecuencias en nuestro ordenamiento jurídico de rango legal.

Como consecuencia de esta independencia constitucional, la materia correspondiente a la regulación y dirección de la educación superior universitaria estatal quedó excluida de la competencia constitucional del Consejo Superior de Educación y fue conferido directamente a estas instituciones como potestad constitucional independiente y como cometido estatal al mismo tiempo.

Dentro de esta potestad de organización y gobierno las instituciones de educación superior universitaria estatal adoptaron desde el 31 de octubre de 1977 una normativa para el establecimiento de la nomenclatura de grados y títulos para esta educación. En ella fue considerado el “grado asociado” de “diplomado”. La normativa vigente fue promulgada el 4 de mayo de 2004, conservando el “diplomado” como grado de primer nivel para el ámbito de la educación superior universitaria estatal.

El análisis que viene dándose entorno al grado de “diplomado” –sin distinción- ha provocado el error de omitir la diferencia entre el “diplomado” de la educación superior universitaria estatal y el “diplomado” de la educación superior que complementa a la educación diversificada, denominada educación “parauniversitaria”, no regulada por las instituciones de educación superior universitaria estatal.

Los diplomados conferidos dentro de la educación superior parauniversitaria se rigen por el principio establecido en los artículos 77 y 81 de la Constitución Política. Los otorgados por las IESUE están exceptuados de esta regulación y quedan comprendidos dentro del régimen excepcional de independencia constitucional establecido en su artículo 84.

Si bien los programas de estudio pudieran manifestar la existencia de elementos comunes, el régimen jurídico que le es aplicable a cada uno de estos diplomados es diferente. También lo es el objetivo y finalidad de la formación que se da en cada una de estas modalidades de enseñanza. La universitaria tiene una finalidad y objetivos diferentes a los que son propios del diplomado complementario a la educación diversificada.

De la misma manera, tanto la naturaleza misma de las entidades –universitarias y parauniversitarias- como el régimen de su organización, gobierno y funcionamiento difieren sustancialmente y no admiten homologación. Lo anterior no obsta para que, efectuada de

previo las valoraciones académicas que resulten de rigor, pueda o no otorgarse convalidación universitaria a materias o bloques de materias cursadas en el ámbito parauniversitario.

En forma coherente con la anterior distinción, debe concluirse que el Consejo Superior de Educación es competente para conocer y resolver sobre diplomados parauniversitarios pero no así para los universitarios.

En el ámbito privado universitario, las competencias estatales relativas a su dirección e inspección quedaron reguladas en la Ley N° 6693 de 23 de noviembre de 1981 por la que se creó el Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). Este órgano mantiene sus competencias sobre el quehacer de las universidades privadas que incluyen el grado de primer nivel denominado “diplomado”, según la nomenclatura de grados y títulos que rige desde el año 1977 para la educación superior universitaria del país.

Por otra parte, debe advertirse que lo analizado en el dictamen DAJ-051-C-11 del 5 de abril de 2011 no es la potestad que tengan o no las universidades privadas para otorgar diplomados propios sino la posibilidad de reconocer las materias cursadas en la educación parauniversitaria, materia en la que debe advertirse que no pueden darse reconocimientos o convalidaciones de forma automática.

En atención a las diferencias que existen y deben existir entre la formación universitaria y la formación parauniversitaria, la convalidación universitaria de materias o bloques de materias parauniversitarias, requiere de un análisis académico riguroso que permita evaluar con claridad si esta formación es conducente o no al cumplimiento de los objetivos y perfil propios del plan de estudios universitarios que corresponda.

Consideramos que al pertenecer el diplomado a una etapa comprendida dentro del ciclo de formación universitaria normal –como grado de primer nivel- las universidades privadas se encuentran plenamente facultadas para otorgarlos dentro del cumplimiento de sus propios objetivos y finalidad institucionales.

En resumen, sobre el extremo consultado debemos concluir que:

- En el régimen universitario costarricense existen diplomados universitarios y parauniversitarios regulados por regímenes jurídicos diferentes, con objetivos y finalidades distintas.
- El diplomado parauniversitario se regula por normativa especial que es de conocimiento y competencia del Consejo Superior de Educación.
- En el ámbito de la educación superior universitaria la caracterización del grado de primer nivel de “diplomado” ha sido normado y caracterizado por las instituciones de educación superior universitaria estatal como parte del cometido estatal en educación universitaria que les ha sido atribuido por el artículo 84 de la Constitución Política.
- El “diplomado” universitario privado, por tratarse en nuestro régimen jurídico de un grado de primer nivel universitario, está comprendido dentro de las facultades de aprobación que corresponden al CONESUP.

Dejo en esta forma rendido el criterio solicitado.”

e. Apoyo para el “BLOG” de CR INNOVA.

EL M. SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS manifiesta que de la Comisión NEXO le dijeron que están tratando de adicionar un "BLOG" a la estrategia de redes sociales que tienen en www.cr.INNOVA. La estrategia de divulgación en redes fue financiada por INNOVA para el 2011 por un monto cercano a los cinco mil dólares, sin embargo, ahora necesitan mil dólares para la inversión inicial del "BLOG".

Él les dijo que les iba a consultar porque es un grupo que trabaja bien y mil dólares no es una gran cantidad. Se podría dar de los fondos del CONARE o de la reserva que existe. Ellos tienen una gran interacción con empresas y ha mejorado bastante la apreciación del sector privado. Como comisión interuniversitaria han sido muy diligentes para impulsar las relaciones de vinculación de las universidades con los sectores de gobierno y empresarial. Lo que están buscando es tener un "BLOG" para mantener esas interacciones, incorporarlo en la página cr.innova.net.

SE ACUERDA EN FIRME autorizar la solicitud planteada y girar el monto de \$1000 para cubrir el servicio del "BLOG". Los recursos serán tomados de la partida de "Otras acciones de interés del CONARE".

- f. Correo electrónico de fecha 30 de junio de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), sobre la Misión para Rectores y altas autoridades de América Latina y el Caribe, del 14 al 20 de octubre próximo.

EL M.SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS explica que ellos están preparando una misión a China con los rectores afiliados y envían la información correspondiente.

LA DRA. YAMILETH GONZÁLEZ explica que el accionar de la OUI había venido disminuyendo de perfil pero se dinamizó mucho con la llegada de doña Patricia Gudiño. Doña Yamileth -que ha venido representando en la Junta Directiva de la Organización a las universidades centroamericanas- expresa que hay una serie de redes de trabajo conjunto entre universidades, un instituto de gestión y liderazgo y un programa que tiene que ver con doctorados conjuntos. Son los tres ejes de trabajo de la OUI y este que surgió en una reunión a la que solo pudo asistir don Eugenio Trejos. Quien preside la OUI es el Rector de la Universidad de Veracruz, y él propició la visita de rectores de Iberoamérica y cree que va una buena cantidad. Muchos están interesados en asistir para establecer vínculos con las universidades chinas con las que poco espacio se tiene. Las universidades chinas tienen un desarrollo científico y tecnológico impresionante.

SE ACUERDA reenviar el correo a cada Rector y Rectora, con el fin de que lo analicen e informen si alguno desea formar parte de la delegación de la OUI que viajará a China.

- g. DVJ-191-2011 de 23 de junio, 2011. El Ministerio de Justicia y Paz, coordinador de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, solicita la designación de una persona para que atienda a la Dra. Alejandra Castro Bonilla con el fin de discutir la visión de la entidad respecto a la Propiedad Intelectual en Costa Rica.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT explica que se trata de una misión del BID, están haciendo el diagnóstico nacional.

SE ACUERDA EN FIRME que el M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez y el Lic. Gastón Baudrit atiendan a la Dra. Alejandra Castro Bonilla

- h. Posibilidad de realizar alguna actividad preventiva de capacitación para gente ubicada en una zona de un posible terremoto en Nicoya.

LA DRA. SANDRA LEÓN informa que ella recurrió a alguna gente de la Universidad Nacional, con motivo de una idea que le presentó don Luis Guillermo Carpio, en el sentido de realizar una actividad con las comunidades de las cuatro universidades que tienen impacto en la Península de Nicoya.

La gente de la UNA le está proponiendo que se realice dicha actividad el 5 de octubre porque se celebra el 61 aniversario del terremoto de esa localidad, consideran una buena oportunidad para formar personas en esa zona en la atención de posibles emergencias. Proponen que la actividad sea de unas cien personas contando con representantes de las cuatro universidades públicas y la participación de expertos en sismología que podrían ser los de la UNA que han venido trabajando lo del fallamiento en la zona.

Si están de acuerdo podrían comenzar a organizar la actividad para esa fecha o alguna otra que dispongan.

EL M.B.A. LUIS GUILLERMO CARPIO opina que es importante que las universidades realicen ese tipo de actividades. Él conversó con alguien al respecto y el punto es que el terremoto de Nicoya es científicamente inminente y nadie está haciendo nada en ese sentido. Le parece que sería un buen impacto social que las universidades realizaran una buena presentación y por supuesto que está totalmente de acuerdo con dicha actividad.

SE ACUERDA acoger la propuesta de la señora Rectora de la Universidad Nacional para que proceda a la organización de una actividad preventiva de capacitación en Nicoya, el 5 de octubre próximo, con representantes de las cuatro universidades y la participación de los expertos de la UNA en Sismología.

- i. Nota SCI-528 del Consejo Institucional del ITCR comunica acuerdo sobre la ratificación del nombramiento de los Vicerrectores y Vicerrectoras durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2015.

SE TOMA NOTA de las siguientes designaciones:

Dra. Claudia Madrizova Madrizova, como Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos.

M.Sc. Luis Paulino Méndez Badilla, como Vicerrector de Docencia

M.B.A. Marcel Hernández Mora, como Vicerrector de Administración

Dr. Milton Villarreal Castro, como Vicerrector de Investigación y Extensión.

A las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.